

# La destrucción de los testimonios de las víctimas de abusos infantiles silencia su voz

## Canadá y Reino Unido enfrentan un pasado de abusos

CARLOS DÍAZ REDONDO

Cuesta imaginar una acción más terrible que robarle la dignidad a un niño. Más inhumano resulta, si cabe, cuando los responsables de semejante afrenta forman parte del sistema gubernamental de un país.

En esta tesitura, Canadá revive ahora uno de los episodios más sombríos de su historia. No es noticia que desde mediados del siglo XIX, y durante más de cien años, hasta 150.000 niños

a escuelas residenciales repartidas por todo el país. Estas instituciones, financiadas por el Gobierno y por diferentes iglesias -presbiteriana, anglicana, católica, etc.-, perseguían un fin muy concreto: el adoctrinamiento de los niños nativos mediante la tajante separación de sus familias, la supresión de su entorno cultural o la prohibición de hablar su lengua y practicar su religión. Aterra pensar que no es-

sus puertas en los años 90 del siglo XX.

Pues bien, así, cautivos por voluntad de un país, aquellos escolares tuvieron que sobrevivir en condiciones inhumanas, atrapados en un ambiente de película de terror, en edificios de pésima calidad, sin apenas ventilación, donde la falta de higiene y la comida podrida dieron rienda suelta a enfermedades como la tuberculosis, de-



aborígenes, integrantes de las llamadas Naciones Originarias de Canadá y de las etnias Inuit y Métis, fueron separados de sus familias y obligados a asistir

tamos hablando de algo relativamente lejano en el tiempo. La última de estas escuelas, situada en el lugar de Lebrét, Saskatchewan, cerró finalmente

satándose brotes que elevaron la tasa de mortandad hasta el 75% en algunos de estos centros. Sometidos a la continua barbarie y brutalidad de sus

educadores, las historias de abusos fueron durante años un secreto a voces. Resulta tan estremecedor repasar el listado de los castigos aplicados, recogidos por las propias autoridades, que quien escribe prefiere

proceso judicial, los abusos sexuales, físicos y psicológicos de los que fueron víctimas durante la niñez.

A tal extremo llegó la preocupación por su privacidad que pronto, para temor de his-

nal de Investigación de la Universidad de Manitoba, que ya custodia millones de documentos sobre las escuelas residenciales procedentes de sedes gubernamentales e iglesias.

Con todo, Canadá no es el único país que se ve obligado a enfrentar su pasado. Reino Unido lidia estos días con un antiguo fantasma. El escándalo estalló en la década de los 80, cuando el diputado Geoffrey Dickens entregó un extenso dossier de carácter interno al entonces ministro de Interior, Leon Brittan, que contenía suculentas pesquisas acerca de las actuaciones de una red de corrupción de menores asentada en Westminster y en la que resonaban nombres de altos cargos políticos y funcionarios públicos. Ahora, según las últimas noticias, hasta 114 informes integrantes del referido dossier han sido destruidos sin razón alguna o han desaparecido misteriosamente del archivo del Ministerio de Interior. Curiosamente, la ausencia de estos documentos, redactados entre los años 1979 y 1999, se detectó en 2003, si bien el hecho no había trascendido hasta ahora.

El primer ministro David Cameron ha movilizado al personal del Ministerio de Interior, ordenando a su secretario permanente, Mark Sedwill, que investigue la desaparición de los documentos. Mientras tanto, la actual ministra, Theresa May, ya ha anunciado la puesta en marcha de una investigación oficial y la creación de un grupo de expertos encabezado por Peter Wanless, actual director de la Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad en los Niños, que tratará de averiguar el paradero de los 114 informes extraviados y si su oportuna volatilización responde, como todo apunta, a una descarada estrategia para proteger el sistema político y encubrir a los presuntos culpables. ■



omitir tales detalles para evitar herir sensibilidades.

Pasados los años, miles de supervivientes decidieron emprender acciones judiciales y relatar sus experiencias al Secretariado de Adjudicación de Escuelas Residenciales Indias, buscando una compensación por parte del Gobierno federal que les permitiese reparar su honor y resarcirse de sus recuerdos. Así, sus testimonios quedaron recogidos en cerca de 40.000 expedientes, que incluyen desde grabaciones sonoras y transcripciones hasta informes médicos, y en los que se detallan toda clase de castigos, violaciones, abortos, muertes en extrañas circunstancias, enterramientos furtivos, intentos de suicidio y, lo que es más importante, los nombres de los responsables y de los testigos que, impasibles, presenciaron los hechos. Sin embargo, muchos de los supervivientes, ante el temor de que sus vivencias viesan la luz pública, se negaron a recordar de nuevo, esta vez ante la Comisión para la Verdad y la Reconciliación formada en el

toridores y archiveros, comenzaron a sonar voces exigiendo que todo rastro de estos testimonios fuese destruido una vez finalizado el contencioso. Entre estas voces destaca la del abogado canadiense Dan Shapiro, cabeza del Secretariado de Adjudicación de Escuelas Residenciales Indias, para quien la preservación de la memoria histórica no pasa necesariamente por la conservación de evidencias tan sumamente íntimas y denigrantes.

La cuestión había de dirimirse en los juzgados. Y, por fin, la Corte Superior de Ontario ha resuelto el conflicto. Según ha trascendido, los interesados tendrán un plazo de quince años para decidir sobre el destino de sus propios expedientes. Transcurrido este periodo, comenzará un proceso de destrucción controlado. Aquellos que decidan dejar constancia de sus vivencias verán sus expedientes transferidos a alguno de los archivos nacionales canadienses, si bien parecería más apropiada su transferencia al Centro Nacio-